

Roxana Pessoa Cavalcanti, 2020
Birkbeck University of London, British Society of Criminology,
European Group for the Study of Deviance and Social Control, King's
College London, University of Brighton, University of Westminster.
Reino Unido.
Cavalcanti@brighton.ac.uk
<https://orcid.org/0000-0003-3885-8603>



Recibido: 2020-12-21 | Revisado: 2021-01-03
Aceptado: 2021-01-06 | Publicado: 2021-01-19

Una criminología sureña sobre violencia y control: gobernando la inseguridad en el Sur global¹

A southern criminology of violence and control: governing insecurity in the global south¹

ABSTRACT

Pocos estudios han examinado las relaciones entre la juventud marginada en las urbes y el sistema de seguridad pública en el noreste de Brasil. Este artículo aborda esta brecha en la literatura a través de un examen de las percepciones juveniles en una agenda de seguridad dirigida a reducir la violencia. También analiza los efectos de este programa de seguridad al interrogar los discursos hegemónicos de actores estatales en la región, a saber, agentes del sistema de justicia penal. El análisis se basa en datos etnográficos recopilados entre 2012 y 2016 en Recife, ciudad capital del estado de Pernambuco en el noreste de Brasil. Este enfoque permite un examen de las nuevas intervenciones de seguridad y una comparación entre dos distintas narrativas sobre esta nueva agenda de securitización. La primera narrativa se centra en las vulnerabilidades de los jóvenes, la otra en los reclamos de securitización exitosa. Un análisis de estas narrativas amplía la comprensión de los efectos y riesgos de las intervenciones de seguridad, contribuyendo al debate sobre su impacto en la vida de los jóvenes y la sociedad en general.

INTRODUCCIÓN

Ha surgido una literatura importante que identifica el tema de la violencia juvenil en las comunidades urbanas pobres de todo el mundo (Feltran, 2011; Hagedorn, Davis y Ebrary, 2008). En Brasil, estas comunidades a menudo se denominan favelas (barrios marginales y asentamientos informales) y periferias (áreas periféricas). Los extraños tienden a percibir estas comunidades como lugares indeseables para vivir. Son barrios de clase trabajadora donde viven trabajadores

1. I Congreso Internacional de Derecho Penal y Sistema de Rehabilitación. UTPL – Loja, Ecuador – 22, 23 y 24 de enero 2020 (<https://research.brighton.ac.uk/en/activities/una-criminolog%C3%ADa-sure%C3%B1a-de-violencia-y-control-gobernando-la-inse>)

autónomos, empleados del sector servicios y trabajadores domésticos. Son comunidades en las que los lazos familiares, el trabajo duro y la movilidad social son muy valorados. También están repletos de asociaciones comunitarias, organizadores y líderes. Sin embargo, han llamado la atención del público en general como lugares violentos, conocidos por sus altos índices de asesinatos y por las representaciones cinematográficas arraigadas en la conciencia pública a través de películas como *Cidade de Deus* (2002) y *Tropa de Elite* (2007). Las ciencias sociales y la literatura etnográfica que examinan el contexto problemático en el que la violencia se ha convertido en una parte central de la vida pública, han tendido a ignorar las experiencias de los jóvenes y las percepciones de seguridad y justicia en Brasil.

A veces, esta violencia se asocia con “pandillas” (Fernandes, 2013; Jones y Rodgers, 2009), o con otras formas de crimen organizado, especialmente el tráfico de drogas (Arias, 2006; Bourgois, 2003; Denyer Willis, 2015). En otras ocasiones, toma la forma de resistencia política o comunitaria (Davies, 2006; Scheper-Hughes, 2004). Los jóvenes suelen ser los autores de la violencia letal, pero con mayor frecuencia son víctimas de la policía y de los escuadrones de la muerte (Arias, 2006; Huggins, 1997; Zaluar, 2010). Las causas y las fuentes de violencia e inseguridad son múltiples. Se relacionan con factores históricos, socioeconómicos y geográficos complejos (Pereira, 2008). Se sabe menos sobre cómo los jóvenes se relacionan, responden y perciben este contexto desafiante.

Pinheiro (2006, p. Xviii) sugiere que nuestra incapacidad para escuchar a los jóvenes ha llevado a una incapacidad para comprender y responder a sus necesidades. Este artículo examina las narrativas de los jóvenes y los agentes de seguridad sobre un proceso de securitización regional. El estudio se centra en Recife, la segunda ciudad más grande del noreste de Brasil, donde se ha implementado un programa de seguridad pública conocido como “Pacto por la Vida” para reducir las altas tasas de asesinatos desde 2007. Este artículo pregunta cómo los jóvenes que viven en Recife responden a la naturaleza de las intervenciones estatales. ¿Qué efectos tienen las nuevas formas de control formal en las comunidades en las que viven? En última instancia, ¿qué papel juega el Estado y sus políticas en la fluctuación (continuación, expansión o reducción) de diversas formas de violencia en las comunidades socialmente más excluidas?

Estos problemas son importantes porque la securitización de los espacios urbanos puede producir relaciones sociales desiguales a lo largo de líneas espaciales, étnicas y de clase (Becker & Müller, 2013; Davis, 2013). La securitización se conceptualiza aquí como un proceso en el que las preocupaciones sobre la seguridad, la ley y el orden, dominan los enfoques para resolver los problemas sociales. Este proceso está asociado con la especulación política, la política de ley y orden y con discursos punitivos hegemónicos. También está conectado a la exportación global de “policía de tolerancia cero” (Young, 2011). La exportación de este enfoque para la securitización de espacios urbanos es un ejemplo clásico de las formas en que las teorías criminológicas viajan desde el Norte global y se aplican sin crítica al Sur. Los intentos de limpiar las calles de grupos y comunidades que se perciben como desordenados y socialmente indeseables (por ejemplo, los pobres y marginados) son atractivos para las élites locales, las empresas y los desarrolladores de bienes raíces que buscan ganancias, todos ellos actores muy influyentes en la ciudad de Recife.

LA VIOLENCIA Y EL ESTADO EN AMÉRICA LATINA

Los teóricos estatales y los científicos sociales han debatido en qué medida el contexto violento de Brasil está relacionado con el tema de la ausencia estatal. O'Donnell (1993) argumentó que las violaciones de los derechos humanos estaban relacionadas con la ausencia del imperio de la ley y de instituciones estatales efectivas en las comunidades pobres. Su tesis encarna una falacia común de que las ciudades brasileñas están divididas entre áreas accesibles y prohibidas. En el primero, el Estado se percibe como presente, mientras que en el segundo, supuestamente territorio de delincuentes, está ausente. Un libro de Zuenir Ventura (1994), *Cidade Partida* (“La ciudad dividida”), se centra en esta dualidad ideológica. Este énfasis en la “división” y en la “dualidad” ignora las conexiones que existen entre las diferentes áreas de la ciudad. Se vuelve tentador percibir a las favelas no solo como áreas pobres sino también disfuncionales, que no han logrado integrarse con el resto de la ciudad; áreas en las que los traficantes impiden el progreso y el desarrollo de la sociedad civil porque no tolerarán formas de organización social o política que puedan desafiar su poder. Este concepto erróneo común no reconoce las formas en que el Estado está presente en diferentes territorios y las formas en que las áreas pobres están conectadas al sistema político y al resto de la ciudad.

Elizabeth Leeds (1996) argumentó que, en lugar de estar ausente, el Estado está enredado en relaciones violentas a través de relaciones patrón-cliente con los residentes de las favelas. En una línea de argumento similar, Arias (2006) desplegó teorías de ‘redes sociales’ para argumentar que la violencia en áreas urbanas pobres no fue causada por la ausencia del Estado, sino por una red compleja que involucraba a una variedad de actores sociales: sociedad civil (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, asociaciones de residentes), la policía, políticos corruptos y residentes de favelas. Esto sugiere la necesidad de mirar más allá de la hipótesis del “abandono del Estado” (Wacquant, 2003) que a menudo se aplica a las comunidades más pobres de la región. El Estado a menudo es parte de los problemas existentes (Arias, 2006; Gledhill, 2013).

Además, en algunos aspectos, el estado brasileño, específicamente durante el gobierno del Partido de los Trabajadores (2002–2014), no había “abandonado” a los pobres. El Partido de los Trabajadores aumentó el gasto en educación, salud, transferencias monetarias condicionadas (TMC) y aumentó el salario mínimo (Hall, 2008; Molyneaux, 2008). Aunque la mayor parte del aumento del gasto público se dirigió a las TMC a menudo criticadas, en la década de 2000 Brasil experimentó una reducción de la informalidad laboral (Comin, Barbosa y Carvalhaes, 2012) y la pobreza (Barros, Carvalho, Franco y Mendonça, 2010 ; Neri, 2009). Este período de crecimiento económico, empleo creciente y mejoras en las oportunidades de vida de los más pobres de Brasil se detuvo cuando el país entró en recesión y la derecha política recuperó las filas más altas del gobierno (Cavalcanti, 2017).

En lugar de examinar el “abandono estatal” per se, este artículo sugiere que es importante examinar la naturaleza de las intervenciones estatales. Esto exige un análisis de cómo se llevan a cabo las intervenciones estatales y cómo son interpretadas, experimentadas, desafiadas y nego-

ciadas (Darke, 2013) por aquellos en el extremo receptor. También requiere una comprensión del contexto complejo en el que el Estado existe y se relaciona con sus ciudadanos.

JUVENTUD EN EL CONTEXTO DE BRASIL

Desde la década de 1980, tanto la tasa de homicidios como el uso de armas de fuego en los homicidios ha venido aumentando en la mayoría de los países latinoamericanos (Arias y Goldstein, 2010). Solo en 2014, aproximadamente 60,000 personas fueron asesinadas en Brasil (Cerqueira et al., 2016). Brasil tiene la tasa más alta de homicidios entre los 12 países más poblados del mundo (Waiselfisz, 2013). También hay una distribución desigual de muertes en el país, con las regiones del Norte y Nordeste viendo incrementos mucho más altos en los niveles de violencia letal en la década de 2000. En el Noreste, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 19,4 en 2000 a 33,5 en 2009 (Souza, Ribeiro y Valadares, 2012, p. 52). Si bien el aspecto geográfico es relevante para este fenómeno, también deben considerarse dimensiones de género, etnia y clase. De acuerdo con una encuesta nacional a gran escala (Waiselfisz, 2011, p. 60), la probabilidad de muerte para un hombre joven que no es blanco y que tiene entre 15 y 25 años en 2008 fue 127.6% mayor que la de un hombre blanco en el mismo rango de edad. La mayoría de las víctimas de homicidio son jóvenes negros pobres (Waiselfisz, 2014). En 2010, la tasa de homicidios juveniles (15–29 años) con arma de fuego en Brasil alcanzó 42.5 / 100,000 de la población, en comparación con 9.1 / 100,000 en 1980 (Waiselfisz, 2013, 13): casi un aumento de cinco veces en 30 años. Los niveles generales de violencia letal continúan en aumento, haciendo de Brasil uno de los países menos seguros para los jóvenes. Sin embargo, a nivel político y legal, se produjeron una serie de cambios prometedores y progresivos en el país entre los años 1990 y 2000. Por ejemplo, el gasto en salud pública y educación aumentó, un programa de beneficios de ingresos familiares (conocido como Bolsa Familia) fue implementado con efectos positivos en los niveles de pobreza extrema y la desigualdad (Hall, 2008; Molyneaux, 2008; Neri, 2009). En 1990, Brasil reemplazó una ley discriminatoria, represiva y segregacionista denominada “Código de Menores” por la Ley de Niños y Adolescentes Adolescente (ECA). El Código del Menores en funcionamiento desde 1927 hasta 1990 había discriminado entre las definiciones de “niño” y “menor” (Rizzini, 1997). Los niños fueron construidos como personas inocentes merecedoras de la protección de los adultos, mientras que los menores de edad infractores fueron considerados como jóvenes no merecedores de protección, que provienen de familias pobres y moralmente deficientes (Drybread, 2014, p. 757). Este código permitió legalmente la posibilidad de institucionalizar la indeterminación del procesamiento de los niños, independientemente de si habían violado o no la ley (Drybread, 2009). ECA redefinió la infancia al incluir a todos los niños y adolescentes como ciudadanos con derechos y prohibir su procesamiento, a menos que cometan un atroz delito de violencia como violación, asesinato o secuestro con una pena máxima de tres años (Drybread, 2014, p. 758). Los jóvenes menores de 12 años se consideran niños incapaces de cometer delitos y los que tienen entre 12 y 18 años se consideran adolescentes, que no pueden ser considerados penalmente responsables.

ECA se convirtió en una referencia para América Latina debido a su énfasis en los derechos humanos y en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2015). Este cambio

legal favoreció un nuevo discurso que construye a los jóvenes como portadores de derechos y no como objetos de intervención (Moore, 2015, 273). Sin embargo, todavía no está claro cuánto han cambiado las prácticas discriminatorias a partir de esta legislación. Las prácticas policiales siguen inspiradas por malas interpretaciones que retratan a los hombres jóvenes, pobres y negros como criminales y a las mujeres jóvenes, pobres y negras como moralmente peligrosas. Estas prácticas discriminatorias resuenan con desigualdades más amplias en Brasil, una sociedad que permite la discriminación racista y clasista al identificar el crimen con la pobreza.

A pesar de los avances legales y políticas que Brasil ha logrado en los últimos 25 años, la actual recesión económica y el creciente desempleo (Amorim, 2016), junto con la destitución de la presidente Rousseff del partido de los trabajadores en 2016 y la sucesión de un gobierno conservador, plantea nuevas amenazas a los jóvenes de la nación. El gobierno interino, apoyado por una asamblea parlamentaria conservadora, ha propuesto congelar el gasto público (Alessi, 2016), el apoyo a la reducción de la edad de responsabilidad penal y el aumento de sentencias para delincuentes juveniles de 3 a 10 años (Douglas, 2015).

Este enfoque punitivo es alimentado por conceptos erróneos sobre el control del delito que surge en sociedades donde el miedo al crimen y las altas tasas de criminalidad están muy extendidas (Garland, 2001). En el contexto brasileño, el aumento de las penas, como lo ilustra el crecimiento extremo de la población carcelaria, se ha asociado con la intensificación de la guerra contra las drogas, la inclusión del narcotráfico en la lista de crímenes atroces en la década de 1990 y la práctica de encarcelar a usuarios de drogas y traficantes a pequeña escala como si fueran narcotraficantes (Carvalho, 2013; Darke & Garces, 2017). Además, como señalan Azevedo y Cifali (2015), se han propuesto y creado rápidamente leyes punitivas en respuesta a las demandas del gran público, en un contexto de grandes disparidades en el uso de políticas penales e instituciones de justicia penal en cada estado federativo. El estado de São Paulo y el estado de Pernambuco por ejemplo, bajo el gobierno del partido PSDB, han experimentado tendencias conservadoras en el campo de las políticas de seguridad pública, con un uso cada vez mayor de la política penitenciaria y de orden público durante un período de políticas nacionales redistributivas de izquierda. Se espera que estos cambios recientes generen costos sociales devastadores. Personas jóvenes constituyente uno de los grupos más victimizados en Brasil, al ser construidos como criminales que necesitan sanciones penales más severas. El resto de este artículo examina un caso de intervención estatal dirigida a reducir la violencia y las formas en que los jóvenes han respondido a un intento de securitizar el contexto problemático en el que viven.

METODOLOGÍA

Este artículo se basa en múltiples fuentes de datos cualitativos recopilados y analizados entre 2012 y 2016. Los datos etnográficos se recopilaron a través de observaciones, preguntas abiertas y entrevistas semiestructuradas (Emerson, Fretz y Shaw, 1995) con jóvenes de edad entre 16 y 29 años, en dos comunidades de bajos ingresos en la ciudad de Recife, en el noreste de Brasil (N = 120). Mi experiencia de vivir en Brasil durante más de 17 años y el conocimiento de las normas culturales facilitaron el establecimiento del acceso a través de contactos locales. Los

jóvenes participantes fueron reclutados a través de una escuela local y a través de los contactos de una organización comunitaria juvenil. Utilicé el método de bola de nieve (Atkinson y Flint, 2001) para acceder a una muestra mas amplia, basada en los criterios de residencia en comunidades de bajos ingresos. Dado la limitada disponibilidad de información sobre las percepciones y experiencias de seguridad de los jóvenes en el noreste de Brasil, mi intención fue dar voz a los jóvenes marginados para que sean escuchados y se discutan los temas que consideran importantes.

Se llevaron a cabo cuatro grupos focales en las dos comunidades, en una organización comunitaria y en una escuela, con el objetivo de explorar los problemas que los residentes y jóvenes consideran importantes. Se realizaron entrevistas¹ semiestructuradas con activistas de la comunidad, miembros de alto y bajo rango de la policía militar y civil, así como con miembros del aparato de seguridad pública, por ejemplo, estadísticos, la corregedoria² policial y formuladores de políticas públicas. Las entrevistas con estos grupos se refirieron a cambios que ocurrieron con la implementación de la nueva intervención de seguridad y las evaluaciones de los participantes sobre las fortalezas y debilidades de esta intervención. Un total de 185 participantes fueron escuchados. También realicé observaciones de reuniones gubernamentales en la Secretaría de Planificación y Gestión (SEPLAG) en Recife. Mi enfoque temático fue adoptado para analizar los temas emergentes más recurrentes (Butler-Kisber, 2010).

LA GÉNESIS DE UN PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS

En el contexto de altos niveles de homicidio, los gobiernos latinoamericanos han estado interesados en adoptar soluciones rápidas y eficaces a los problemas delictivos, emulando la experiencia estadounidense, que es percibido como la mejor práctica (Bailey y Dammert, 2006). En 2007, un programa de reducción de la violencia conocido como “Pacto por la vida” (PPV), se implementó en todo el estado de Pernambuco, donde se encuentra Recife. El programa se basa principalmente en las ideas de la criminología gerencial convencional, como la teoría de la elección racional y prevención situacional del crimen (Clarke, 1997; Clarke y Felson, 2004), que intensifican el control social formal (por ejemplo, el uso de vigilancia y vigilancia). Lo más importante, emula el COMPSTAT programa de actuación policial utilizado en la década de 1990 en Nueva York (Macedo, 2012). Este enfoque se centra en la gestión de la información, las estadísticas de delincuencia y los objetivos policiales y ha sido acreditado con el “Milagro de Nueva York” (Young, 2011).

En 2007, el gobernador del estado de Pernambuco, Eduardo Campos, contrató a un sociólogo de la universidad federal de Pernambuco, el profesor Ratton, para que trabajara como su asesor público de seguridad. Entre marzo y abril de 2007, se llevaron a cabo un conjunto inicial de consultas y eventos. Se organizaron como parte de un foro de seguridad pública donde el tema

1 Por razones éticas y para asegurar la confidencialidad de los participantes, los nombres de los participantes y los detalles de las comunidades relevantes se han anonimizado.

2 Ombudsman

de la seguridad pública era debatido y un plan era elaborado. Se propusieron más de cien ideas de proyectos (PESP-PE, 2007; Ratton, Galvão y Fernández, 2014) y se clasificaron en seis líneas de acción. Estos incluyeron mejorar la capacidad de respuesta a las víctimas, prevención social, más participación, trabajo, planificación mejorada, gestión de la información, evaluación y capacitación de personal de seguridad pública.

Aunque la inversión en seguridad pública creció rápidamente, muchos de los proyectos no se implementaron, como confirmaron las entrevistas con servidores públicos. Esta crítica corrobora los hallazgos de otros estudios (Macedo, 2012; Portella & Nascimento, 2014). La prevención social del delito (por ejemplo, programas de rehabilitación de drogas) y la capacitación de la policía también recibió muy poca atención. Mientras tanto, los proyectos implementados - centrados en gestionar objetivos policiales y realizar más arrestos, tuvieron el efecto de expandir el sistema de justicia penal, haciendo aún más las cárceles y exacerbando relaciones adversarias entre policías y jóvenes.

EL DISCURSO HEGEMÓNICO DEL ÉXITO

Aunque existe una clara disparidad en la implementación de proyectos, con la línea dura de control represivo que tiene prioridad sobre los enfoques sociales, PPV fue reconocido como un éxito. El programa fue acreditado con reducciones en los niveles de homicidio (Ratton et al., 2014) en el estado de Pernambuco, donde “entre 2000 y 2005 la tasa promedio de homicidios fue de 54.13, mientras que entre 2006 y 2011 este promedio cayó a 46.67” (Ratton et al., 2014, p. 1). PPV recibió premios internacionales del Banco Interamericano de Desarrollo en 2014 y de las Naciones Unidas en 2013 (ver GEPE, Gobierno del Estado de Pernambuco, 2013; Ribeiro, 2014). También ha sido promovido como modelo para el gobierno federal de Brasil, secretaria de seguridad pública (SENASP) y otros estados brasileños (Macedo, 2012). La intervención fue uno de los principales puntos de comercialización de la campaña política del gobernador del estado de Pernambuco Eduardo Campos (2007–2014). Reducciones altamente publicitadas en los delitos violentos asociados con el PPV facilitaron la reelección de Campos para un segundo mandato en oficina y lanzó su carrera política a nivel nacional (Wolff, 2014). En la narrativa de los miembros de la policía y los agentes de seguridad pública entrevistados, dos son los principales factores que constituyeron la causa de la reducción exitosa de los homicidios. Esos fueron: (1) el cambio a un modelo de mayor gestión de objetivos; y (2) el aumento de la inversión en recursos policiales. Esto se ilustra en el siguiente extracto de la entrevista³ con un miembro superior de la gerencia de la secretaria de seguridad pública:

Para lograr reducciones en el homicidio, tener la voluntad política es un comienzo. Pero un punto importante es el modelo de gestión por resultados. También hay inversión. Aumentamos el presupuesto de seguridad pública de R \$ 20 millones (reales brasileños) por año a alrededor de R \$ 80 millones por año. Estos 80 millones fueron principalmente para inversión estructural, como invertir en estaciones de policía, automóviles apropiados para

3. Entrevista en unidad de policía, Agosto 2013.

la policía, uniformes apropiados, pistolas, chalecos antibalas. También hemos reclutado 10.000 nuevos profesionales en los últimos 10 años.

La aparente solución al crimen tenía connotaciones bastante americanizadas: aumento de la vigilancia y control formal. Algunos expertos admitieron haber viajado a los Estados Unidos y observado los modelos de vigilancia que (en su opinión) funcionaban, incluido Tolerancia Cero, como se muestra en una entrevista⁴ con el jefe de la policía civil de Pernambuco:

Durante los años transcurridos desde que comenzó el Pacto por la Vida, la población carcelaria se ha más que duplicado; de alrededor de 15,000 a 30,000 reclusos ahora. Entre las políticas criminológicas exitosas en todo el mundo, tuve la oportunidad de visitar Nueva York y conocer su policía de Tolerancia Cero, donde tenían una tasa de encarcelamiento muy alta. Aquí no ha sido diferente. [...] Yo sabía que funcionaría. En seis meses pasamos de 50 a 400 capturas por mes. La secretaria decidió que este era el secreto del éxito. El secreto del éxito es el encarcelamiento. Este es nuestro objetivo. No conozco ninguna otra política en el mundo que pueda revertir la situación de violencia sin encarcelamiento.

El enfoque punitivo del control del delito ha sido ampliamente discutido en criminología en los últimos años (Feeley y Simon, 1992; Garland, 2001; Wacquant, 2003). No es el objetivo de esta discusión explorar este fenómeno directamente. Lo que aborda este artículo son algunos de las formas en las que este fenómeno se ha manifestado en los discursos brasileños sobre seguridad y algunos de sus efectos sociales. El caso de la ampliación de la vigilancia y el encarcelamiento de PPV, como lo ilustran las narrativas policiales anteriores, ha exacerbado muchos problemas existentes en Brasil. Por ejemplo, la población carcelaria en Pernambuco, así como en el resto de Brasil, ha aumentado continuamente desde la década de 1990 (Carvalho, 2013), incluso antes de la implementación de PPV. Está claro que este proceso se ha acelerado durante los años PPV.

Sin embargo, hubo una reducción general en el número de homicidios en el estado de Pernambuco y en Recife entre 2008 y 2013 (Ratton et al., 2014), pero con más fluctuaciones recientes hacia arriba (Oliveira, 2015). Es difícil, y tal vez imposible, evaluar si esto es un impacto directo de Pacto por la Vida o si puede haber otros factores influyentes. Es importante tener en cuenta que, aunque las intervenciones represivas de seguridad han sido comercializadas y presentadas como un éxito, han tenido resultados perversos. El siguiente análisis de las percepciones de los jóvenes ilustra algunos de estos efectos.

El mito de una “democracia racial”, que es la idea de que el mestizaje brasileño condujo a relaciones sociales no racistas, ha sido en general desacreditado, refutado y cuestionado por múltiples estudios que revelan las profundas desigualdades raciales de Brasil (Skidmore, 2010, 199–200). La evidencia que surge de las entrevistas con miembros de la policía y con residentes en comunidades de bajos ingresos indica que tanto la clase social como la “raza” fueron factores movilizados en interacciones policía - comunidad. Este no es un hallazgo sorprendente: está

4. Entrevista en unidad de policía, Agosto 2013.

bien respaldado por la literatura brasileña e internacional (Barros, 2008; Bowling & Phillips, 2007; Wacquant, 2008; Zaluar, 2004); sin embargo, es bastante duradero y sombrío. Lo que es distintivo en la evidencia presentada aquí es el grado de discriminación, desdén y divisiones de clases étnicas y sociales en la forma en que las relaciones entre la comunidad y la policía tomaron forma en Recife, a pesar de los esfuerzos para implementar nuevas intervenciones de seguridad. La nueva agenda de seguridad instituyó nuevos modos de gobernanza policial, con la creación y el monitoreo regular de objetivos. Sin embargo, no se hizo ningún esfuerzo significativo para reformar la policía o cambiar las prácticas policiales. La distribución desigual de la policía y las tácticas policiales desproporcionadas, como el perfil racial de la policía, la confrontación verbal y física con los residentes de las comunidades pobres, generaron resentimiento y hostilidad hacia los métodos de la policía. Como consecuencia, se daña la confianza en las instituciones públicas, y los residentes se niegan a proporcionar información a la policía. El enfoque de aumentar los recursos policiales y la gestión los objetivos de desempeño no logran que la policía actúe de manera justa o que proteja a los ciudadanos más marginados.

NEGOCIANDO LA VIDA Y LA CRIMINALIZACIÓN EN UNA CIUDAD VIOLENTA.

Los jóvenes residentes experimentaron un toque de queda informal y muchos se abstuvieron de usar el espacio público, debido al miedo al crimen y al miedo a ser percibido como un criminal. Ellos afirmaron que usar el espacio público después de las 9 p. m. y ser negro, implicaba criminalidad para aquellos vigilando la guerra contra las drogas, un problema que se muestra en las narrativas de las interacciones entre los jóvenes y la policía:

Mi hermano regresaba de un concierto por la noche cuando uno de sus compañeros le robó su cadena de plata. Entonces decidió llamar a la policía. Cuando llegó la policía, en lugar de tratarlo como una víctima, ellos le acusaron de robo y de portar un arma de fuego. No tenía arma de fuego. Le dispararon, pero él sobrevivió [...] Mi otro hermano estuvo involucrado en el tráfico de drogas y fue asesinado a tiros por la policía el año pasado. Mi madre quedó devastada. (João5, 17 años)

Estas narraciones revelan mucho sobre la lucha de personas criminalizadas y marginadas en un estado cada vez más penal. Como han argumentado varios académicos, Brasil ha estado experimentando un cambio hacia un discurso de gestión de crimen y seguridad en el que transgredir las fronteras sociales se ve cada vez más como una amenaza (Feltran, 2011; Moore, 2015, pp. 267-268). El uso del espacio público, el acceso a actividades de ocio y bienes de consumo por parte de los afrodescendientes se vigila y se percibe como una amenaza para las personas de mayor edad. Las relaciones de poder han fortalecido el lugar de privilegio y dominio de las élites blancas, las que son percibidas y tratadas como dignas de respeto y derechos de ciudadanía. Para los jóvenes marginados, cruzar esos límites se ha vuelto cada vez más peligroso, aumentando su exposición a la violencia letal o a ser criminalizado y eventualmente pasar tiempo en centros carcelarios de rápido crecimiento.

5. Entrevista en una escuela en Vitoria, Julio 2013.

Los hombres jóvenes en las comunidades expresaron una bravuconería masculina, alegando que a pesar de los riesgos y peligros de estar fuera por la noche, todavía usaban el espacio público por la noche. Una de sus estrategias de supervivencia era caminar en grupos. Para mujeres jóvenes por otro lado, la violencia y la violación son riesgos múltiples. Los casos de violación en la comunidad eran una amenaza suficiente para inhibir el uso del espacio público. Por la noche las mujeres jóvenes expresaron sentirse encarceladas dentro y fuera de sus hogares. Además de los riesgos fuera del hogar, la violencia doméstica también abundaba como se ilustra en los siguientes comentarios de una joven entrevistada:

No paso mucho tiempo en la calle, así que no sé mucho sobre el vecindario. Sabemos que tenemos problemas de saneamiento [y] deslizamientos de tierra en la comunidad durante la temporada de lluvias que hacen que las personas puedan perder sus hogares. Hay mucho tráfico de drogas y consumo, especialmente crack y cocaína [...] De vez en cuando escuchas que una persona joven que fue asesinada [...] Como un amigo de mi primo, fue asesinado por deudas de drogas, eso es bastante común. También hay casos de hombres que matan a sus mujeres. Recientemente un hombre disparó, mató y cortó el cuerpo de su mujer a causa de los celos (Clarisse6, 16 años, Julio 2013).

El énfasis de PPV en la reducción de homicidios y el aumento de los niveles de encarcelamiento ha dejado de lado otros crímenes importantes en comunidades pobres, incluyendo violación, violencia no letal, violencia contra las mujeres, la extorsión y los crímenes cometidos por actores estatales, como los abusos policiales y abusos de los derechos humanos en las cárceles y en las instituciones para jóvenes delincuentes. Los problemas que enfrentan las mujeres y de los jóvenes en lugares marginales en general, han sido ignorados por la policía. PPV definió y aplicó en exceso la idea de seguridad como la reducción de los homicidios. Esto tiene prioridad sobre la protección general de los derechos humanos. Las exigencias de respeto y equidad respecto de las personas en comunidades de bajos ingresos, no han ido de la mano con una actuación policial legítima o una reforma policial democrática. La mayoría de los residentes en las comunidades de bajos ingresos estudiados no notaron ningún resultado positivo como efecto de las intervenciones de seguridad pública a nivel del territorio. En suma, la protección del estado de derecho no ha sido el énfasis de programas como PPV. Cambiar el enfoque y los métodos de los programas de seguridad es fundamental para promover una democracia más justa y una mejor vigilancia policial. Esto debe comenzar desde el entrenamiento de la policía y tiene que incluir campañas educativas para aumentar el apoyo público al estado de derecho y el rechazo a vivir con delincuentes organizados en un estado punitivo. La evidencia de las comunidades de estudio de caso reveló que simplemente encarcelar a miembros de los grupos delictivos organizados, según los residentes, no desmantela a los grupos de exterminio a cargo de la venta de seguridad en estas comunidades. Los participantes explicaron que existen grupos de seguridad y exterminio formados por ex policías que extorsionan a los residentes pidiéndoles dinero a cambio de sus servicios. Los residentes fueron obligados a pagar honorarios y afirmaron que serían víctimas potenciales de los estafadores de seguridad si no lo hicieran. Los grupos de exterminio fueron responsables de la justicia informal en la comunidad, matando a delincuentes

6. Entrevista en una escuela en Vitoria, Julio 2013.

menores, personas que debían dinero e incluso traficantes de drogas y usuarios. Según algunos residentes el encarcelamiento de miembros de estos grupos informales no ha resuelto los problemas en la comunidad:

Algunas personas perdían el tiempo cuando Marcos estaba fuera porque la comunidad no tenía problemas con las drogas. El problema de las drogas comenzó aquí en los últimos 7 o 10 años. Pero tú sabes que él no fue arrestado por culpa de la comunidad. Nadie aquí hubiera hablado de él (lo denunció a la policía). Pero sus amigos también son expolicías y todos están siendo investigados por ser parte de un grupo de exterminio. [...] Ahora todo está aquí abajo, hay crack de cocaína en todas partes. Cuando Marcos estaba fuera, el problema en la comunidad era solo homicidios entre grupos de seguridad rivales. La gente murió a causa de la competencia entre grupos de exterminio. Un grupo comenzó a aterrorizar a la comunidad para dañar la reputación del otro grupo, porque querían hacerse cargo del negocio de seguridad, causando todo tipo de peleas. (Luther7, 29 años)

A pesar del aumento del gasto en vigilancia policial con la implementación de PPV, el monopolio de la violencia en estas comunidades continúa fragmentado y los marginados continúan siendo tratados como víctimas tanto de la policía violenta como ilegales grupos de seguridad que a menudo están formados por ex policías. Desde adentro en la prisión, los miembros de estos grupos continuaron manejando y obteniendo ganancias de forma parasitaria; negocios que extorsionan a los residentes, al vender por la fuerza formas alternativas de seguridad. Los jóvenes percibieron el programa de seguridad PPV como un discurso político más.

Una intervención que propuso reducir la violencia no les permitió sentirse más seguros. Se sentían cada vez más discriminados por la policía sobre la base de su estatus social. Cuando se les preguntó qué debería hacer el estado para reducir violencia, las demandas locales clave fueron intervenciones sociales y preventivas como la inversión en (1) capacitación vocacional para los jóvenes, (2) educación de mejor calidad, (3) acceso a espacios de ocio y actividades culturales, (4) mejores oportunidades de trabajo, (5) la desmilitarización y capacitación mejorada para que la policía desarrolle el diálogo y el respeto de los derechos humanos en sus interacciones con el público. Los residentes vieron esto como esencial para promover una sociedad más segura. En cambio, Pacto por la Vida se enfoca en demostrar más vigilancia y más encarcelamiento de delincuentes por medio de objetivos de medición y monitoreo.

CONCLUSIÓN

La violencia policial y las diversas formas de violencia de rutina han develado serios problemas en América Latina, predominantemente en las comunidades más afectadas por las desigualdades sociales. Mi estudio ha examinado los efectos de un programa gerencial de reducción de homicidios en una ciudad brasileña. Los datos sugieren que la emulación de la corriente principal criminológica, las teorías sobre el control del delito del Norte Global, basadas en la idea de ges-

7. Entrevista durante un paseo en Tourinho, Octubre 2013.

tionar las estadísticas del delito y el desempeño policial, sin una reforma policial, sin políticas integrales y adecuadas de reducción de desigualdades sociales, han producido perversidades a gran escala en el contexto de los países del Sur Global.

Teorías producidas en el norte y aplicadas en el sur, no han tenido en cuenta: el contexto del Sur Global, la literatura que emerge del Sur, diversos daños complejos y las experiencias y victimización de los habitantes urbanos marginados, las mujeres y los jóvenes. Métodos de control del crimen no pueden tener éxito si no se entienden dentro del contexto histórico y socioeconómico de las comunidades afectadas y de las instituciones que supuestamente están generando cambios, en este caso, la policía y el sistema de justicia penal.

Hubo una clara disonancia entre lo que funcionarios de alto rango, policías y académicos involucrados en nuevas intervenciones de seguridad afirmaron como un “éxito” (Ratton et al., 2014), y lo que experimentaron las personas en comunidades marginadas. Los pobres en las comunidades estudiadas se sintieron cada vez más atrapados, aislados y criminalizados, mientras la vigilancia aumenta. La policía ahora tiene objetivos, y se midió su trabajo y desempeño sobre la base del volumen de drogas y armas de fuego que detuvieron, y el número de las investigaciones que concluyeron y fueron enviadas a juicio.

Las tasas de encarcelamiento crecieron, pero los males de larga data en la policía, incluyendo racismo, clasismo, prácticas violentas y cultura militarizada, no fueron abordados ni atacados. Tanto el modelo y la intensidad del uso de la policía y el uso creciente de la prisión tuvieron efectos perversos para las comunidades estudiadas, algunas de las cuales pueden ser capturadas por la incapacidad de estos métodos para mantener el orden o contener el crimen, un tema ilustrado por la relación entre el encarcelamiento y la inseguridad en las comunidades marginadas. Este fracaso también es evidente si consideramos las tasas de homicidio y los niveles de violencia solo disminuyó hasta 2013.

El Estado quizá simplemente ha contribuido a una fluctuación en los niveles de violencia, pero en última instancia, la adopción de securitización por parte del Estado ha demostrado ser insostenible. El contexto en el que los delincuentes organizados operan e interactúan con comunidades externas sobre, debajo y a través de los muros de la prisión, personifica los fracasos de métodos de control del delito del Norte global. Los programas de seguridad no han logrado inhibir diversas formas de crimen violento y organizado. Además, la agenda de securitización promete exacerbar desigualdades existentes que afectan a las poblaciones más marginadas al incorporarlas al sistema de justicia penal como sospechosas y perpetradoras, y no como víctimas.

REFERENCIAS BIOGRÁFICAS

- Alessi, G. (2016, October 13). Entenda o que é a PEC 241 e como ela pode afetar sua vida. El País. https://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476125574_221053.html
- Amorim, D. (2016, October 27). Taxa de desemprego fica em 11,8% e mantém patamar his-

- tórico. Estadão. <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,taxa-de-desemprego-fica-em-11-8-e-mantem-patamar-historico,10000084713>
- Arias, E. D. (2006). *Drugs & democracy in Rio de Janeiro : Trafficking, social networks, & public security*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Arias, E. D., & Goldstein, D. M. (2010). Violent pluralism: Understanding the new democracies of Latin America. In E. D. Arias & D. M. Goldstein (Eds.), *Violent democracies in Latin America* (pp. 1–34). Durham, NC: Duke University Press.
- Atkinson, R., & Flint, J. (2001). Accessing hidden and hard-to-reach populations: Snowball research strategies. *Social Research Update*, 33, 1–4.
- Azevedo, R. G., & Cifali, A. C. (2015). Política criminal e encarceramento no Brasil nos governos Lula e Dilma: Elementos para um balanço de uma experiência de governo pós-neoliberal. *Civitas - Revista de Ciências Sociais*, 15(1), 105–127.
- Bailey, J., & Dammert, L. (2006). Public security and police reform in the Americas. In J. Bailey & L. Dammert (Eds.), *Public security and police reform in the Americas* (pp. 1–23). Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- Barros, R., Carvalho, M. D., Franco, S., & Mendonça, R. (2010). Markets, the state, and the dynamics of inequality in Brazil. In L. López-Calva & N. Lustig (Eds.), *Declining inequality in Latin America: A decade of progress?* (pp. 134–174). New York, NY: UNDP and Brookings University Press.
- Barros, G. D. S. (2008). Filtragem racial: a cor na seleção do suspeito. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, 2(3), 134–155.
- Becker, A., & Müller, M.-M. (2013). The securitization of urban space and the “rescue” of downtown Mexico city: Vision and practice. *Latin American Perspectives*, 40(2), 77–94. doi:10.1177/0094582x12467762
- Bourgois, P. I. (2003). *In search of respect : Selling crack in El Barrio* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Bowling, B., & Phillips, C. (2007). Disproportionate and discriminatory: Reviewing the evidence on police stop and search. *The Modern Law Review*, 70(6), 936–961.
- Butler-Kisber, L. (2010). *Qualitative inquiry: Thematic, narrative and arts-based approaches*. London: Sage.
- Carvalho, S. (2013). Theories of punishment in the Age of mass incarceration: A closer Look at the empirical problem silenced by justificationism (The Brazilian case)*. *Open Journal of Social Sciences*, 1(4), 1–12.
- Cavalcanti, R. P. (2017, January 25). How Brazil’s far right became a dominant political force, the conversation. Retrieved from <https://theconversation.com/how-brazils-far-right-became-a-dominant-political-force-71495>
- Cerqueira, D., Ferreira, H., Lima, R. S. D., Bueno, S., Hanashiro, O., Batista, F., & Nicolato, P. (2016). *Atlas da Violência. Brasil: IPEA & FBSP*.
- Clarke, R. V. G., & Felson, M. (2004). *Routine activity and rational choice*. New Brunswick, NJ: Transaction.
- Clarke, R. V. G. (1997). *Situational crime prevention : Successful case studies* (2nd ed.). New York, NY: Harrow and Heston.
- Comin, A. A., Barbosa, R. J., & Carvalhaes, F. O. (2012). *Manufacturing jobs: Economic cycles, job creation and structural change*. Coventry: ESRC Pathfinder Programme on Collaborative Analysis of Microdata Resources, Warwick Institute for Employment Research IER.

Retrieved from https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/research/glmf/heeer/manufacturing_jobs_in_brazil_-_comin_js_pdf.pdf

- Darke, S., & Garces, C. (2017). Surviving in the new mass carceral zone. *Prison Service Journal*, Special Edition: Informal Dynamics of Survival in Latin American Prisons, 229, 2–9.
- Darke, S. (2013). Inmate governance in Brazilian prisons. *Howard Journal of Criminal Justice*, 52(3), 272–284.
- Davies, M. (2006). *Planet of slums: Urban involution and the informal working class*. London: Verso.
- Davis, D. E. (2013). Zero-tolerance policing, stealth real estate development, and the transformation of public space: Evidence from Mexico city. *Latin American Perspectives*, 40(2), 53–76. doi:10.1177/009458212467761
- Denyer Willis, G. (2015). *The killing consensus: Police, organized crime, and the regulation of life and death in urban Brazil*. Berkeley: University of California Press.
- Douglas, B. (2015, April 17). Brazil's 'bullets, beef and bible' caucus wants to imprison 16-year-olds. *The Guardian*. Retrieved from http://www.theguardian.com/world/2015/apr/17/brazil-rightwing-caucus-lower-age-criminal-responsibility?CMP=share_btn_tw
- Drybread, K. (2009). Rights-bearing street kids: Icons of hope and despair in Brazil's burgeoning Neoliberal state. *Law & Policy*, 31(3), 330–350. doi:10.1111/j.1467-9930.2009.00304.x
- Drybread, K. (2014). Murder and the making of man-subjects in a Brazilian juvenile prison. *American Anthropologist*, 116(4), 752–764. doi:10.1111/aman.12147
- Emerson, R., Fretz, R., & Shaw, L. (1995). *Writing ethnographic fieldnotes*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Feeley, M., & Simon, J. (1992). The new penology: Notes on the emerging strategy of corrections and its implications. *Criminology; An Interdisciplinary Journal*, 30, 449–474.
- Feltran, G. D. S. (2011). *Fronteiras de Tensão: Política e Violência nas Periferias de São Paulo*. São Paulo: Unesp.
- Fernandes, F. L. (2013). Youth gang members in Rio de Janeiro: The face of a 'lost generation' in an Age of fear and mistrust. *Bulletin of Latin American Research*, 32(2), 210–223. doi:10.1111/blr.12030
- Garland, D. (2001). *The culture of control: Crime and social order in late modernity*. Oxford: Clarendon.
- GEPE, Governo do Estado de Pernambuco. (2013, July 23). *Governo de Pernambuco recebe prêmio da ONU pelo êxito do Pacto Pela Vida*. Retrieved November 1, 2016, from <http://www.pe.gov.br/blog/2013/06/27/governo-de-pernambuco-recebe-premio-da-onu-pelo-exito-do-pacto-pela-vida/>.
- Gledhill, J. (2013). The production of insecurity in Brazil and Mexico. Paper presented at the SLAS 2013 annual conference, University of Manchester, Manchester, UK.
- Hagedorn, J., Davis, M., & Ebrary, I. (2008). *A world of gangs: Armed young men and gangsta culture*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Hall, A. (2008). Brazil's Bolsa Família: A double-edged sword? *Development and Change*, 39(5), 799–822.
- Huggins, M. K. (1997). From bureaucratic consolidation to structural devolution: Police death squads in Brazil. *Policing and Society*, 7(4), 207–234.
- Huggins, M. K. (1998). *Political policing: The United States and Latin America*. Durham, NC: Duke University Press.

- Jones, G. A., & Rodgers, D. (2009). Youth violence in Latin America [electronic resource]. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Leeds, E. (1996). Cocaine and parallel polities on the Brazilian urban periphery: Constraints on local level democratization. *Latin American Research Review*, 31(3), 47–84.
- Macedo, A. d. O. (2012). “Polícia, quando quer, faz!” Análise da Estrutura de Governança do “Pacto pela Vida” de Pernambuco (Masters). Universidade de Brasília.
- Meirelles, Fernando. (Director). (2002). Film title: *City of God*. Producers: Andrea Barata Ribeiro, Mauricio Andrade Ramos, Elisa Tolomelli, Walter Salles. Distributors: Miramax Films (US) and Buena Vista International. Date released: 18 May 2002 (Cannes); 30 August 2002 (Brazil).
- Molyneux, M. (2008). The ‘neoliberal turn’ and the New social policy in Latin America: How neoliberal, how new? *Development and Change*, 39(5), 775–797.
- Moore, H. (2015). “Do you have my son?” Criminalization and the production of (un)relatedness in Brazil. In J. Minaker, & B. Hogeveen (Eds.), *Criminalized mothers, criminalizing mothering* (pp. 264–291). Bradford, ON: Demeter Press.
- Neri, M. (2009). Income policies, income distribution, and the distribution of opportunities in Brazil. In L. Brainard & L. Martínez-Díaz (Eds.), *Brazil as an economic superpower?* (pp. 221–269). Washington, DC: Brookings Institution Press.
- O’Donnell, G. (1993). On the state, democratization, and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some postcommunist countries. *World Development*, 21(8), 1355–1369.
- Oliveira, W. (2015, March 2). Pacto pela Vida dá sinais de fracasso, *Diário de Pernambuco*. Retrieved from <http://blogs.diariodepernambuco.com.br/segurancapublica/?p=8014>
- Padilha, J. (Writer). (2007). *Elite Squad*. In J. Padilha & M. Prado (Producer). Brazil: Universal Pictures (Brazil), IFC Films (United States).
- Pereira, A. W. (2008). Public security, private interests, and police reform in Brazil. In P. R. Kingstone & T. J. Power (Eds.), *Democratic Brazil revisited* (pp. 185–208). Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
- PESP-PE. (2007). *Plano Estadual de Segurança Pública: PACTO PELA VIDA*. Recife: Cultura. Retrieved from http://www.seres.pe.gov.br/index/pacto_pela_vida.pdf
- Pinheiro, P. S. (2006). World report on violence against children. Geneva. Retrieved from United Nations secretary-general’s study on violence against children: [http://www.unicef.org/lac/full_text\(3\).pdf](http://www.unicef.org/lac/full_text(3).pdf)
- Portella, A. P., & Nascimento, M. G. D. (2014). Impactos de Gênero na Redução da Mortalidade Violenta: Reflexões sobre o Pacto pela Vida em Pernambuco. *Revista Brasileira de Segurança Pública*, 8(1), 48–68.
- Ratton, J. L., Galvão, C., & Fernandez, M. (2014). Pact for life and the reduction of homicides in the state of Pernambuco. *Stability: International Journal of Security & Development*, 3(1), 1–15.
- Ribeiro, L. M. L. (2014). Modelo de Gestão por Resultados do programa Pacto pela Vida, Pernambuco, Brasil. Retrieved from GovernArte: Categoria Governo Seguro: [http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6564/GovernArte, Categoria governo seguro \(Version en Portugues\).pdf?sequence=4](http://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/6564/GovernArte_Categoria_governo_seguro_(Version_en_Portugues).pdf?sequence=4)
- Rizzini, I. (1997). *Olhares sobre a criança no Brasil: séculos XIX e XX* Rio de Janeiro: Ed. Universitária Santa Úrsula/Amais.

- Scheper-Hughes, N. (2004). Dangerous and endangered youth: Social structures and determinants of violence. In J. Devine, J. Gilligan, K. A. Miczek, R. Shaikh, & D. Pfaff (Eds.), *Youth violence: Scientific approaches to prevention* (pp. 13–46). New York: New York Academy of Sciences.
- Skidmore, T. E. (2010). *Brazil : Five centuries of change* (2nd ed.). New York, NY: Oxford University Press.
- Souza, E. R. D., Ribeiro, A. P., & Valadares, F. C. (2012). Informações sobre os homicídios no Brasil: uma ferramenta para a consolidação da democracia e da cidadania. Retrieved from <http://www.usp.br/imprensa/wp-content/uploads/5C2BA-RelatC3B3rio-Nacional-sobre-os-Direitos- Humanos-no-Brasil-2001-2010.pdf>
- UNICEF. (2015). ECA 25anos: Estatuto da Criança e do Adolescente: Avanços e desafios para a infância e a adolescência no Brasil (online). Retrieved from <http://www.unicef.org/brazil/pt/ECA25anosUNICEF.pdf>
- Ventura, Z. (1994). *Cidade Partida*. Sao Paulo: Companhia de Letras.
- Wacquant, L. C. J. D. (2003). Toward a dictatorship over the poor? Notes on the penalization of poverty in Brazil. *Punishment & Society-International Journal of Penology*, 5(2), 197–205. doi:10.1177/146247450352004
- Wacquant, L. C. J. D. (2008). *Urban outcasts: A comparative sociology of advanced marginality*. Cambridge: Polity.
- Waiselfisz, J. J. (2011). Mapa da Violência: Os Jovens do Brasil (online). Retrieved from [http://www.cnt.org.br/ImagensCNT/NotC3ADcias/Fevereirode2011/2011mapa_ViolC3AAncia\(1\).pdf](http://www.cnt.org.br/ImagensCNT/NotC3ADcias/Fevereirode2011/2011mapa_ViolC3AAncia(1).pdf)
- Waiselfisz, J. J. (2013). Mortes Matadas por Armas de Fogo: Mapa da Violencia. <http://mapadaviolencia.org.br/>
- Waiselfisz, J. J. (2014). Mapa da Violencia 2014: Os jovens do Brasil. Retrieved from http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2014/Mapa2014_JovensBrasil_Preliminar.pdf
- Wolff, M. J. (2014). *Criminal authorities and the state: Gangs, organized crime, and police in Brazil* (PhD). University of New Mexico, USA.
- Young, J. (2011). *The criminological imagination*. Cambridge: Polity.
- Zaluar, A. (2004). *Integração Perversa: Pobreza e Tráfico de drogas*. Rio de Janeiro: FGV.
- Zaluar, A. (2010). Youth, drug traffic and hypermasculinity in Rio de Janeiro. *Vibrant – Virtual Brazilian Anthropology*, 7(2), 7–27.